

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, un nuevo enemigo público se construyó desde la comunicación oficial del Estado salvadoreño. Los Acuerdos de Paz habían desarmado al último gran enemigo: el guerrillero, el terrorista, el piricuaco, comunista que tanto mal había hecho. Frente a esto, ¿A quién culpar de los nuevos males y distraer el análisis y las conversaciones de la corrupción, de los nuevos pactos bajo la mesa, de ese nuevo mal que ha sido en toda América Latina el crimen organizado? En la década de 1990 empezaban ya a existir organizaciones de jóvenes en los barrios de toda Centroamérica. Tenían nombres llamativos que algún lector recordará: la Mao-Mao en distintos lugares de El Salvador o la Mara Plaza Vivar Capitol en Guatemala, se mencionaban desde la década anterior. Sin embargo, no eran lo suficientemente peligrosos. Ya hemos señalado desde la Universidad cómo estos grupos fueron aumentando su peligrosidad de manera proporcional al aumento de las políticas represivas. Con Francisco

Flores, las pandillas decidieron volverse menos visibles, con Elías Antonio Saca muchos líderes de sus clicas dieron la orden de dejar de tatuarse, con Mauricio Funes descubrieron la fuerza de ser actores políticos pues es sabido, desde hace muchos años, que las pandillas generan miedo, pero son útiles para ganar elecciones. El expresidente de Honduras, Ricardo Maduro, comentó, en son de broma en una conferencia de prensa, que debía su elección a las maras. Es decir, que gracias al miedo a las pandillas, la población había apoyado su candidatura. La historia de Centroamérica hasta hoy nos ha demostrado que con mano dura y con mayor militarización no se soluciona el problema asociado a las pandillas, algunas de las cuales son el brazo más visible de un crimen organizado invisible. Lo que sí se consigue con esto es ganar elecciones. El equipo de comunicación del presidente Bukele lo sabe. No les interesa ganar la #GuerraALasPandillas. Los audios de Carlos Marroquín, quien sigue siendo funcionario,



demuestran que además al Gobierno le interesa apoyar a pandilleros para que eludan su enfrentamiento con distintos espacios de justicia, como muestra el caso de la negación a extraditar a algunos líderes de estas. En el contexto celebratorio de su tercer año de mandato, el actual Gobierno se sabe señalado por manejos oscuros. Tiene además varios funcionarios involucrados en procesos de corrupción, violencias y abusos de poder (incluido el juicio que espera en Guatemala al Ministro de Gobernación por violencia contra su esposa), un bitcóin que pierde cada vez más valor, una inflación que no para y una elección a las puertas. Lo que se necesita para la reelección es volver a la fórmula de los mismos de siempre, nada de nuevas ideas: hay que recurrir al combate a las pandillas, pero con el cuidado de controlarlas solo lo justo, lo necesario para que el presidente asegure un segundo mandato. Los malabares del presidente incluyen ir contra la Constitución de la República -va a proponer una nueva-, contra la democratización -quizá le guste más la monarquía, así su hija podrá heredar esta pequeña hacienda, cada vez con menos árboles-, y contra la diversidad de pensamiento, por eso guiere que todos pensemos igual y lo apoyemos a él. Por eso sus comunicadores manejan la agenda y nos dicen de qué debemos hablar: no hablemos de bitcóin, no hablemos del alza de los precios, no hablemos del calentamiento global y de la manera en cómo nos afecta, hablemos de pandillas. Frente a este lugar seguro, el reto de los movimientos sociales, la academia, los sectores intelectuales del país es que no debemos quitar el dedo del renglón. Hablemos de la situación del bitcóin que bajó de la barrera de los 22,000 dólares y que implica inversiones sin ninguna garantía. Y ya sabemos que Mauricio Funes robó al país, pero eso no da derecho a otros gobernantes de hacer lo mismo de nuevo. Hablemos de la necesidad de justicia y verdad para la

diputada Yanci Urbina y también para la exesposa del ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía, a quien este gobierno protege. Merece la pena correr riesgos por este país. Como sociedad estamos en la obligación de exigir que no roben, que hagan justicia a las mujeres, que no dilapiden y que cumplan.



Foto: presidencia.gob.sv